

Expediente: 1738/08

Carátula: LIPRANDI OLIVA LEON Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Unidad Judicial: OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 2

Tipo Actuación: INTERLOCUTORIAS CIVIL CON FD

Fecha Depósito: 22/04/2026 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

90000000000 - LIPRANDI OLIVA, LEON-ACTOR/A

20293976385 - LIPRANDI OLIVA, GASTON JOSE-ACTOR/A

90000000000 - SPUCHES, VICTORIA-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, GREGORIO-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, CARMELO-DEMANDADO/A

30716271648513 - SPUCHES, VICTORIO-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, CONCEPCION MARIA-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, JOSE-DEMANDADO/A

30716271648513 - DEFENSORIA OFICIAL DE POBRES Y AUSENTES DE LA IV° NOM, -EN REPRESENTACION DEL AUSENTE

90000000000 - SPUCHES, ANGELA CONEPCIÓN-DEMANDADA

90000000000 - SPUCHES, DIEGO ALEJANDRO-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, HUMBERTO SALVADOR-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, HECTOR OSVALDO-DEMANDADO/A

20293976385 - LIPRANDI OLIVA, TOMAS SANTIAGO-ACTOR/A

90000000000 - SPUCHES, NESTOR DANTE-DEMANDADO/A

90000000000 - SPUCHES, SALVADOR JESÚS-DEMANDADO/A

20293976385 - LIPRANDI OLIVA, PEDRO CESAR-ACTOR/A

30716271648513 - SPUCHES, LUCIANO-DEMANDADO/A

20235182662 - SPUCHES, ALBERTO CARMELO-DEMANDADO/A

20235182662 - GUILLEN, HORACIO JAVIER-POR DERECHO PROPIO

33539645159 - CAJA DE PREVISION Y S.S. ABOGADOS Y PROC. -

30716271648513 - SPUCHES, MANUELA-DEMANDADO/A

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 2

Juzgado Civil y Comercial Común V nom

ACTUACIONES N°: 1738/08



H102326098759

San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2026.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver estos autos caratulados: “LIPRANDI OLIVA LEON Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA” (Expte. n° 1738/08 – Ingreso: 02/07/2008), y;

CONSIDERANDO

1. Antecedentes

Mediante presentación de fecha 19 de marzo de 2026 el letrado Horacio Javier Guillen, solicitó se regulen honorarios profesionales por su actuación en este proceso.

Conforme lo proveído el 20 de marzo de 2026, los presentes autos pasaron a despacho para resolver lo peticionado.

Cabe aclarar que la presente resolución también incluirá los estipendios de todos los letrados y profesionales intervinientes.

2. Consideraciones

Entrando al análisis del caso, advierto que, en sentencia de fecha 29 de abril de 2025 se resolvió: "**I. HACER LUGAR** a la demanda por prescripción adquisitiva deducida por León Lipriandi Oliva con DNI N° 26.638.593, Gastón José Lipriandi Oliva con DNI N°27.581.110, Tomás Santiago Lipriandi Oliva con DNI N° 29.397.638 y Pedro Cesar Lipriandi Oliva con DNI N° 30.540.971, y en consecuencia declarar adquirido a su favor el dominio del inmueble ubicado "Alto de la Polvora" sobre Avenida Cicunvalación sin Número, entre calle Warnes y Murga - Provincia de Tucumán, identificado según Plano de Mensura N° 50551/07: Circunscripción I, Sección 9, Lamina 1bis, Parcela 4j, Padrón 321169, Matrícula 7204, Orden 1505, con una Superficie Total de 1257,1063 m2. Siendo sus medidas: del punto (1-2) 23,00m; del punto (2-3) 112,21m; punto (3-4) 12,50m; y del punto (4-1) 90,94m; Linda al Norte con Fermin I Romero; al Sur con Sanchez Toranzo; al Este con Lipriandi Oliva; al Oeste con Llanos y al Sur con Avda. Circunvalación. Matrícula N-22562. Inscripto en el Registro Inmobiliario bajo el siguiente antecedente dominial T° 179 y 125, F° 1 y 246 S/B. **II. ESTABLECER** como fecha de adquisición de la posesión a los fines de la prescripción del inmueble mencionado el 11/08/1959, conforme lo prescribe el art. 4015 y 4016 del Código Civil. **III. COSTAS** como se considera. **IV. PREVIO** pago de lo preceptuado por el art. 254 del Código Tributario y por la Ley de Honorarios, otórguese el pertinente testimonio o protocolícese por Escribano. **V. RESERVAR** pronunciamiento de honorarios para su oportunidad."

Seguidamente, por sentencia aclaratoria de fecha 8 de mayo de 2025 se resolvió: "**RESUELVO: I. CORREGIR** los errores materiales contenidos en la Sentencia Definitiva de fecha 29/04/2025, específicamente: en el Punto 1) párrafo 1 y en el Punto 2) antepenúltimo párrafo de las Resultas; en el Punto 1) párrafo 1 y en el Punto 5) párrafos 11, 17, 19, 21 y último párrafo de los Considerandos y en la parte Resolutiva el párrafo I). Es decir, en todos los párrafos antes mencionados, de la sentencia de fondo, donde dice LIPRIANDI deberá decir LIPRANDI."

Por su parte, mediante sentencia interlocutoria del 18 de febrero de 2026 se ordenó: " **I. HACER LUGAR** a la sustitución procesal, solicitada por el letrado Tomás Liprandi Oliva, en su carácter de apoderado de AGV Máquinas S.R.L.. En consecuencia, **TENER** por realizada la cesión de derechos y acciones instrumentada mediante Escritura Pública N° 36 de fecha 05/06/2025, pasada por ante la Escribana María Lucía Gómez Lucero, por los Sres. León Liprandi Oliva, Gastón José Liprandi Oliva, Tomás Santiago Liprandi Oliva y Pedro César Liprandi Oliva, a favor de AGV Máquinas S.R.L., CUIT N° 30-70889163-7, conforme lo considerado. **II. DECLARAR** a AGV Máquinas S.R.L., CUIT N° 30-70889163-7, como cesionaria de las acciones y derechos que le corresponden a la parte actora en los presentes autos, dándole intervención de ley en este proceso, como parte principal, titular de los derechos reconocidos en la sentencia de fecha 29/04/2025, y su aclaratoria de fecha 08/05/2025 (cfr. art. 38 in fine CPCC) (...)"

Dicho pronunciamientos quedaron firme y consentidos.

3. Base Regulatoria

Determinada la oportunidad, corresponde establecer la base regulatoria atento a la naturaleza de la acción incoada.

En efecto, tratándose de una acción de prescripción adquisitiva, donde el objeto del juicio es un bien inmueble susceptible de apreciación pecuniaria, a los fines de la regulación, se imprimió el trámite previsto en el artículo 39, inciso 3 de la ley 5480, -en adelante LH-, a fin de que las partes y los profesionales intervinientes aporten las pautas valorativas para la determinación de la base regulatoria.

Ahora bien, tengo presente que el citado artículo 39 LH, en su inciso 3, completado por el inciso 4, comprende las situaciones en las que se exigen bienes y servicios susceptibles de apreciación

pecuniaria, en cuyo caso el monto de la sentencia se determina por el valor de esos bienes y/o servicios.

El procedimiento allí previsto es que el Juez debe dar intervención al profesional y al obligado al pago de los honorarios para que estimen dichos valores. Dicha estimación puede constituir el monto de la sentencia si existe acuerdo entre las partes en este sentido. Pero si no hay conformidad o aproximación entre las estimaciones, se hace necesario el nombramiento de un perito tasador y luego el juez fija el valor del inmueble (artículo 39 inciso 4 LH). En tal caso, procede aplicar la norma arancelaria que establece que la base reguladora debe coincidir con el valor real del bien. Es que el cumplimiento de la carga de estimación es sólo un paso técnico para evitar la pericia si las partes están de acuerdo, pero no tiene valor en el caso contrario" (LL 1989-A-369, citado, p. 240 en: "Honorarios de Abogados y Procuradores" Brito-Cardoso de Jantzon).

En el presente caso, se ha cumplido con el citado procedimiento previsto en la ley arancelaria, esto es, de la base regulatoria propuesta por el letrado Horacio Javier Guillen, quien estimó el valor del inmueble objeto de esta litis en la suma de \$653.078,46, se corrió traslado a las partes sin que hubiera oposición alguna a ello.

Por lo tanto, para determinar la base regulatoria en el presente juicio, se observó el procedimiento prescrito por el artículo 39, inciso 3, de la ley 5480, ya que se le dio, tanto al accionante como a la demandada, la oportunidad de estimar la base regulatoria o de oponerse a la propuesta por el letrado Guillen habiendo guardado silencio. Todo ello, implica un asentimiento al presupuesto único, el cual no debe ser objeto de tasación.

En ese sentido, la doctrina ha dicho que la vista que se confiere por cinco días es para que -según el inciso 3- los interesados estimen dichos valores. O sea que se está en presencia de uno de los casos que la ley exige pronunciarse, razón por la cual el silencio de las partes debe interpretarse como asentimiento. Pues solo puede acudirse al dictamen de un perito tasador cuando media disconformidad entre las estimaciones, pues no otro alcance puede dársele a la expresión "si no hubiere conformidad". Y la conformidad puede ser expresa o tácita, configurándose esta última en el supuesto de silencio (cf. ED 85-512; LL 1981- B-336) (Honorarios de Abogados y Procuradores, Brito Cardoso de Jantzon, pág. 239).

Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza del pleito, sus características, por representar el interés económico de las partes, y porque la base aportada luce proporcional con las características del bien objeto de la acción de prescripción, estimo justo y equitativo, fijar la base a los efectos regulatorios en la propuesta que está constituida por el monto propuesto de la valuación fiscal del inmueble, que asciende a \$653.078,46; el cual, de conformidad con la sentencia N° 937 de la CSJT en autos caratulados "Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Arnaldo y otro s/ Daños y Perjuicios", se actualiza con tasa activa desde la fecha de la fecha que data la valuación fiscal en enero de 2026, hasta el día de esta regulación arrojando el resultado de pesos setecientos dieciséis mil quinientos once con 32/100 (\$716.511,32).

Dicha base será tenida en cuenta para el cálculo de las distintas regulaciones.

Se hace constar que se dejan a salvo los derechos de los profesionales para aplicar los intereses pertinentes desde la fecha de la presente resolutive, 16 de abril de 2025, hasta el efectivo cobro de sus honorarios.

4. Honorarios

Determinada la base, y la oportunidad, se tiene en cuenta para realizar los cálculos de la labor efectivamente desarrollada, el carácter en que actuaron los profesionales y las etapas cumplidas, el valor, el mérito y eficacia jurídica de los escritos presentados, la diligencia observada, y lo dispuesto

por los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39 y 41 de la ley 5480.

a) Al letrado Tomas Liprandi Oliva, quien se desempeñó como representante de los actores, en el proceso principal, constato que, mediante presentación de fecha 16 de septiembre de 2025, éste acompañó convenio de honorarios legalizado ante el Colegio de Abogados de Tucumán. De dicho convenio surge que el 5 de junio de 2025 León Liprandi Oliva, Gastón José Liprandi Oliva y Pedro Cesar Liprandi Oliva en carácter de mandantes encargaron al mandatario Tomas Liprandi Oliva la prosecución de estos autos y acordaron los honorarios profesionales del mandatario en la suma correspondiente a una consulta escrita del Colegio de Abogados a la fecha del convenio.

Por tal motivo, existiendo un acuerdo de honorarios debidamente legalizado con sus representados, no corresponde efectuar regulación de honorarios al letrado Liprandi Oliva.

b) Al letrado Osvaldo Carlos Delloca, quien intervino en el proceso como apoderado de los actores en el proceso principal. De las constancias de autos verifico que mediante presentación de fecha 15 de abril de 2010 (fojas 98 del expediente digitalizado) el letrado renunció a la representación y otorgó carta de pago por sus honorarios profesionales. Por ello no corresponde efectuar regulación de honorarios al letrado Delloca.

c) En tercer término me abocaré a determinar los estipendios del letrado Horacio Javier Guillen, quien se desempeñó como letrado patrocinante del demandado Alfredo Carmelo Spuches, en el proceso principal. Verifico que su parte formuló total y efectivo allanamiento de la pretensión esgrimida por la parte actora.

Se procede a regular honorarios de la siguiente manera: \$716.511,32 (base) x 8% dando como resultado la suma de \$57.320,90.

Ahora bien, advierto que el monto estimado resulta exiguo en relación a la labor profesional cumplida el letrado y no alcanza a cubrir el piso mínimo fijado por el artículo 38 in fine de la ley 5480. Por ello, a fin de evitar regulaciones cuyos montos lucen desproporcionados con el valor económico en juego y en procura de obtener una cifra equilibrada y justa, sin desamparar los derechos constitucionales a la protección del trabajo y a la propiedad -consagrados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional-; considero justo elevar el monto de los honorarios, hasta alcanzar el valor equitativo a una consulta escrita, que conforme pautas que determina el Colegio de Abogados de Tucumán -al momento de este pronunciamiento- está determinada en la suma de \$620.000.

d) Respecto de la tarea realizada en el proceso principal por la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV° Nominación, a cargo del letrado Roberto Paz, en virtud de lo normado por el artículo 160 de la Ley 8983 modificada por Ley 8992- y conforme jurisprudencia que establece: *"Además de esta norma que autoriza a que se determinen y perciban honorarios por la actuación profesional de los integrantes del Ministerio Púpilar y la Defensa, se aprecia que se encuentran cumplidas en autos las condiciones que establece el art. 4 de la ley 5480 a los efectos de que sean regulados honorarios por la tarea desarrollada en autos por la Defensoría Oficial, en cuanto, como lo exige el dispositivo legal mencionado y compartiendo el criterio sostenido por la A quo, se trata de una profesional que se encuentra en relación de dependencia y tiene asignación fija como miembro del órgano judicial referido, actúa en tal carácter en representación de los pobres de solemnidad en caso de urgencia, de los ausentes y de las personas menores de edad, cfr. art.160 de la ley 9883- y existe condenación en costas a la parte contraria. Cabe agregar que con fecha 13 de octubre de 2020 se dictó la resolución N°20/20 que aprobó el texto denominado "Régimen de honorarios regulados a favor de la Defensoría Oficial Civil" que como Anexo I) integra la resolución mencionada a través del cual se regula la forma de percepción y destino concreto de tales honorarios, conforme lo prescribe el art. 160 novies de la ley 8.992. Así las cosas el Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que sea procedente la regulación de honorarios a la Defensoría Oficial"* DRAS.: MENENDEZ – CANO. (CCDYLYFYS - CONCEP - SENT.145 del 14/09/2021).

Ahora bien, tengo en cuenta que, en el foro local, procede regulación de honorarios a los Defensores Oficiales en causas donde existe condena en costas a la parte contraria a la que ellos

representaban o defendían. En efecto, existe consenso de sostener que, la Ley N° 8.983 reformó la Ley N° 6.238, trayendo consigo importantes novedades.

En esa línea se dijo que, los honorarios que se devenguen y perciban por la actuación profesional de los integrantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, ingresarán a una cuenta especial del órgano, destinada prioritariamente al mejoramiento de la calidad de las prestaciones del Servicio, conforme se reglamente. Meritado ello, siendo que fue la misma norma la que erigió el principio de gratuidad y permitió a los miembros del Ministerio Pupilar y de la Defensa cobrar honorarios profesionales, solo puede colegirse que dicha gratuidad beneficia únicamente a los que cumplen con los recaudos para acceder al servicio que brinda el organismo y lo utilizan; por lo que, en principio, todos aquellos que litigan en su contra quedan obligados a cubrir los honorarios profesionales "siempre y cuando sean condenados en costas".

Por los argumentos brindados, queda claro que corresponde regular honorarios en esta oportunidad, habida cuenta el resultado del proceso -se hizo lugar a la demanda de prescripción- y la imposición de las costas a la parte actora.

Se procede a regular honorarios de la siguiente manera: \$716.511,32 (base) x 8% dando como resultado la suma de \$57.320,90.

Advierto que el monto estimado resulta exiguo en relación a la labor profesional cumplida al Defensor y no alcanza a cubrir el piso mínimo fijado por el artículo 38 in fine de la ley 5480. Por ello, a fin de evitar regulaciones cuyos montos lucen desproporcionados con el valor económico en juego y en procura de obtener una cifra equilibrada y justa, sin desamparar los derechos constitucionales a la protección del trabajo y a la propiedad -consagrados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional-; considero justo elevar el monto de los honorarios, hasta alcanzar el valor equitativo a una consulta escrita, que conforme pautas que determina el Colegio de Abogados de Tucumán -al momento de este pronunciamiento- está determinada en la suma de \$620.000.

- Ahora bien, por el recurso de revocatoria resuelto el 15 de marzo de 2013 -costas por el orden causado-, se procede a regular honorarios de la siguiente manera: \$620.000 (base) x 10% (artículo 59 LH), dando como resultado la suma de \$62.000.

- Por el recurso de revocatoria resuelto el 24 de junio de 2016 -costas por el orden causado-, se procede a regular honorarios de la siguiente manera: \$620.000 (base) x 10% (artículo 59 LH), dando como resultado la suma de \$62.000.

- Por el recurso de revocatoria resuelto el 21 de febrero de 2007 -costas por el orden causado-, se procede a regular honorarios de la siguiente manera: \$620.000 (base) x 10% (artículo 59 LH), dando como resultado la suma de \$62.000.

5. Intereses

Por último, se hace constar que los honorarios regulados en este pronunciamiento deberán abonarse conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 5480, dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente resolución.

Por su parte, los honorarios devengarán un interés conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde dicha fecha y hasta su efectivo pago.

Por ello,

RESUELVO

I. FIJAR la base regulatoria de honorarios en la cifra de **PESOS SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ONCE CON 32/100 (\$716.511,32)**, conforme lo considerado.

II. NO REGULAR HONORARIOS al letrado **Tomas Liprandi Oliva**, quien se desempeñó como representante de los actores, en el proceso principal, en virtud de lo considerado.

III. NO REGULAR HONORARIOS al letrado **Oswaldo Carlos Delloca**, quien intervino en el proceso como apoderado de los actores en el proceso principal, conforme lo considerado.

IV. REGULAR HONORARIOS al letrado **Horacio Javier Guillen** quien se desempeñó como letrado patrocinante del demandado Alfredo Carmelo Spuches, en el proceso principal, en la suma de **PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL (\$620.000)**.

V. REGULAR HONORARIOS al letrado **Roberto Paz** perteneciente a la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV° Nominación, por su actuación en el proceso principal, en la suma de **PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL (\$620.000)**, conforme lo considerado.

VI. REGULAR HONORARIOS al letrado **Roberto Paz** perteneciente a la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV° Nominación, por el recurso de revocatoria resuelto el 15 de marzo de 2013 la suma de **PESOS SESENTA Y DOS MIL (\$62.000)**, en virtud de lo considerado.

VII. REGULAR HONORARIOS al letrado **Roberto Paz** perteneciente a la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV° Nominación, por el recurso de revocatoria resuelto el 24 de junio de 2016 la suma de **PESOS SESENTA Y DOS MIL (\$62.000)**, en virtud de lo considerado.

VIII. REGULAR HONORARIOS al letrado Roberto Paz perteneciente a la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV° Nominación, por el recurso de revocatoria resuelto el 21 de febrero de 2007 la suma de **PESOS SESENTA Y DOS MIL (\$62.000)**, en virtud de lo considerado.

IX. DETERMINAR un plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente resolución, para ser pagados los emolumentos regulados (art. 23 de Ley N° 5480).

X. ESTABLECER que los honorarios determinados en la presente resolución, devengarán un interés que se actualizará conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina, desde la presente resolución y hasta su efectivo pago.

HAGASE SABER

DR. PEDRO DANIEL CAGNA

JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va NOMINACION

OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 2

Actuación firmada en fecha 21/04/2026

Certificado digital:
CN=CAGNA Pedro Daniel, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20181873966

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.